

Xavier Gamboa Villafranca

2. Obstáculos sociales para la efectiva dirección gubernamental en el proceso de salida a la crisis: México, 1977

I. *La visión oficial: el gobierno como único rector*

Es incuestionable la afirmación del presidente de la República (IX/1/77)* en el sentido de que actualmente “está acabado por sus contradicciones un patrón de crecimiento que agotó su último tabú con la devaluación”. Lo que resta por saber es si la historia comprobará que son realmente efectivas las nuevas reglas —en el fondo, flexibilidad y agilidad de respuesta atinada y ubicada en la trama general— conforme a las cuales el actual gobierno ha enunciado que combatirá la espiral inflacionaria, los movimientos masivos de capitales y los efectos de los cambios radicales en los valores relativos de las principales monedas y de importantes materias primas. En otras palabras, lo que es discutible es si el gobierno de López Portillo tiene la posibilidad real de dirigir el proceso por el señalado —con cierto grado de bases consensuales— como adecuado para salir del “bache” económico. Por tanto, es importante intentar sopesar las posibilidades de que la actividad de los demás sectores sociales se someta —o, incluso, sólo se pliegue— al rumbo marcado por los altos estratos de la burocracia central del Estado mexicano.

Conforme a los planes gubernamentales (IX/1/77), 1977 se plantea como el año de la reconstrucción económica. El año en que, ante la gravedad de la crisis, o se remedia la situación económica con el “concierto” de todos los sectores —dirigidos por el gobierno—, o estalla la violencia. Es un periodo durante el cual ha sido necesario implementar una alianza que permita

conjuguar las intenciones de distintos sectores para armonizar idénticos propósitos, para procurar lo que más necesitan, para eliminar artículos suntuarios, para que las clases de altos ingresos inviertan más y gasten menos, para racionalizar los procesos de elaboración y comercialización (IX/1/77).

* Los números entre paréntesis corresponden a la fecha en que se publicó la noticia en el periódico *Excelsior*.

Hay algunos indicios de que las cosas no están siendo fáciles para la fracción de la burocracia encabezada por López Portillo. En su "Mensaje Político" del 1º de septiembre de 1977, el jefe del Ejecutivo Federal ha intentado la reivindicación verbal de la capacidad de actuación independiente que tiene el gobierno, en particular del cargo que él ocupa: "Como Jefe del Ejecutivo Federal no puedo aceptar presiones. En las cuestiones de mi competencia sólo yo he decidido, decido y decidiré. Si ha habido aciertos, ése es mi compromiso; si errores, mi responsabilidad." La explícita alusión presidencial lleva a plantear las siguientes interrogantes: ¿las perspectivas vislumbradas permiten prever la existencia de una correspondencia entre la anterior afirmación oral y la realidad? ¿La fuerza del gobierno federal es tan verdadera y poderosa como para permitir que éste implante en su totalidad el proyecto de desarrollo que ha formulado, de manera bastante clara, desde principios de año? ¿Es realmente factible la consolidación y operación de la Alianza para la Producción? ¿Qué obstáculos se le presentan al gobierno en este sentido?

II. *El papel "rector" del gobierno en la realidad*

Los acontecimientos parecen estar señalando la existencia de serios obstáculos para que efectivamente sea el gobierno de López Portillo el efectivo conductor del proceso de implantación de su modelo de desarrollo y, por lo tanto, para que en realidad se lleve a cabo la Alianza para la Producción. De ser así, existiría la posibilidad de que sufriera modificaciones el proyecto de desarrollo que ha venido manejando formalmente, al menos hasta septiembre de 1977.

Existen por lo menos tres grandes categorías de factores que dificultan el que el aparato burocrático sea el director único que eche a andar a las diferentes fuerzas sociales en la dirección señalada por sus órganos de planeación:

a) Las presiones que sufre desde el interior de la propia burocracia central, provenientes de grupos relativamente opuestos entre sí, que —por lo menos hasta agosto— habían logrado el acceso a poderosas e influyentes posiciones políticas, que manejan modelos de desarrollo y esquemas de salida a la actual crisis no del todo coincidentes con los del régimen en turno y que representan una suerte de continuidad con las estrategias seguidas con las dos últimas administraciones presidenciales;

b) La composición, funcionamiento y agresividad de la burguesía en la crisis actual, que la coloca en la posibilidad de socavar severamente la relativa independencia del aparato burocrático con respecto a ella y, por tanto, de implantar sus propias concepciones de "salida emergente";

c) El deterioro progresivo de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo "organizada" determina, como posibilidad, el que la maquinaria corporativa del Estado se debilite internamente, lo que a su vez conduce a que —para neutralizar o minimizar este proceso— sus instancias dirigentes tomen

una posición cada vez más radical en la defensa de los intereses de sus miembros, obligándolos las circunstancias a asumir en ocasiones un papel bastante más a la "izquierda" que el que le ha sido delimitado por el aparato gubernamental.

La presencia de este conjunto de dificultades condiciona el que la capacidad directiva del gobierno esté siendo seriamente limitada. En tanto que el capital toma un papel cada vez menos activo en el cumplimiento de los lineamientos que le son señalados por la burocracia del Estado mexicano, la maquinaria corporativa de este Estado denota una progresiva actividad efectiva en la delimitación del contenido de los planes gubernamentales, en la conformación de la Alianza para la Producción y en la real ejecución o no de los compromisos contraídos en ella. Veamos cada una de estas categorías de obstáculos con más detalle.

a) *Dificultades intraburocráticas: el reacomodo sexenal*

El proyecto de salida a la crisis del actual régimen gubernamental, al nivel intraburocrático y en el plano inmediato, se plantea coyunturalmente como la resultante o solución vectorial del proceso de enfrentamiento entre las respectivas concepciones de tres corrientes políticas principales: la corriente del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, que en términos generales sostiene que la conducción del proceso de salida a la crisis debe ser efectuada por un Estado intransigente, represivo y autoritario; el modelo esgrimido por el grupo de seguidores del expresidente Luis Echeverría Álvarez —incrustados no sólo en algunos niveles importantes del aparato de gobierno, sino colocados también en la mayoría de las principales localidades del Congreso de la Unión desde finales del sexenio pasado—, que concibe que es un Estado orientado al cambio, con apoyos populistas, el que debe realizar la planeación y dirigir la acción para salir de la crisis económica, y la tendencia —alimentada por los fieles seguidores del actual presidente de la República— que a grandes rasgos se caracteriza por la visión de que es un Estado árbitro, dirigido por tecnócratas gubernamentales, que permita siempre la actuación conforme a derecho, el que debe efectuar la planeación y señalar la dirección y estrategia del proceso requerido para sacar al país de la crisis.

Desde el 1º de diciembre de 1976 la tendencia que resulta progresivamente fortalecida —y, por lo tanto, el modelo de desarrollo coyuntural que se intentará aplicar en el ámbito extraburocrático— es la encabezada por el presidente López Portillo. Sin embargo la hegemonía de su concepción del quehacer en las presentes circunstancias no estaría totalmente garantizada en tanto persistiera la solidez política denotada por las otras dos corrientes. Es justamente por ello que, en el complejo marco de contradicciones secundarias entre otras corrientes, agudizadas por el contexto de crisis económica en que se desenvuelve la lucha, el conflicto que se suscitó a mediados de agosto (VIII/

16/77) entre Luis Echeverría y Díaz Ordaz tuvo como corolario el que la fracción lopezportillista golpeará a las otras dos. La destitución del presidente de la Gran Comisión —a finales de agosto—, seguida por el hecho de que en la primera semana de septiembre renunciaran aquellos coordinadores de las representaciones de los diputados federales de cada entidad federativa que hubiesen sido altos funcionarios en el sexenio pasado, es un claro indicador del golpe atestado a la corriente echeverrista. La renuncia del propio Díaz Ordaz como embajador en España representa el impacto de la fuerza dirigida contra la otra tendencia en pugna.

Pero el problema de la hegemonía absoluta al interior de la propia burocracia no ha sido totalmente resuelto; continúa, en cierto grado, para el grupo de López Portillo. Aunque las dos corrientes mencionadas fueron duramente castigadas, no murieron; persisten, con mucho menos fuerza que antes, pero persisten. Su debilitamiento fue el efecto de una acción directamente presidencial. La intervención de López Portillo fue legitimada porque los dos expresidentes asumieron un comportamiento de público enfrentamiento, el cual implicó un fuerte rompimiento de las reglas del juego político, que establecen que la actuación de cualquier expresidente puede ser real, pero debe ser mesurada, encubierta.

Con la experiencia de los golpes recibidos, es seguro que en el futuro ambas corrientes —como medio para sobrevivir como tales— se cuidarán de volver a romper abiertamente las reglas establecidas para su actuación. Su simple supervivencia política, aunque por lo pronto debilitada, implica que no es imposible su potencial fortalecimiento, el cual está determinado por la manera específica en que sus dirigentes sean capaces de nutrirse de las contingencias que se presenten. Su persistencia política representa, por tanto, la constante posibilidad de que sus respectivos proyectos, planes, esquemas y programas puedan en cualquier momento influenciar, en grado significativo, los lineamientos lopezportillistas. Especialmente la fracción que tiene ubicados a algunos de sus elementos en la Cámara de Diputados, siempre podrá presionar a la posición gubernamental respecto al contenido de sus planes de desarrollo y cuestionar los resultados emergidos del proceso de implantación de sus planes —de aquella porción, que es efectivamente seguida en la realidad— de salida a la crisis.

Así la implantación de los planes del actual régimen se encuentra inicialmente obstaculizada por factores ubicados en el propio interior del gobierno. Hay elementos políticos que dificultan el que su gestación —y, finalmente, su contenido articulado y coherente— se realice de una manera "pura". O su contenido está "contaminado" por el resultado de las presiones de las corrientes que se han mencionado inmediatamente arriba, o el intento de poner en práctica acciones de acuerdo sólo a los planes "puros" de la fracción hegemónica lopezportillista se enfrenta a la oposición —más o menos eficaz, de acuerdo a la coyuntura concreta en que éste se presente— de estas corrientes. Éste es, pues, el "pecado de origen" de la estrategia de salida a la crisis, esgrimida por el actual régimen presidencial: en su propio ámbito interno se

ubicar fuerzas —que, obviamente, no están aisladas, sino que tienen intereses específicos, relaciones concretas y sistemas de fidelidades personales en el ámbito extraburocrático— que la intentan moldear de acuerdo a sus propias perspectivas.

Pero hasta aquí sólo se ha brindado una visión superficial de las dificultades que, ubicadas en una dimensión política intraburocrática, el gobierno debe vencer para realizar cabalmente su papel de confeccionador e implantador efectivo de una estrategia que logre que todos los sectores salgan de la crisis económica, en los términos de “Alianza” planteados por sus dirigentes. En el ámbito extraburocrático se localizan por lo menos otras dos grandes fuentes de obstáculos a la implantación de los programas del actual régimen: una estaría constituida por dificultades desprendidas del tipo de relación que existe entre el gobierno y los actores sociales que manejan el capital privado; otra estaría conformada por los obstáculos conectados con el tipo de vinculación que se da entre el gobierno y los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado.

b) La burguesía no acepta la rienda gubernamental

La actividad de planeación del gobierno —y la programación económica y social en particular— es planteada por López Portillo y su grupo como una medida para “concertar” la participación de “todos los sectores y de todos los factores”, que impida que el aparato de gobierno sea “presa inerte del juego ciego de las presiones socioeconómicas y patentice nuestra vocación para gobernarlos y gobernar los acontecimientos” (IX/2/77). En el fondo, la planeación gubernamental aparece como una medida destinada a coadyuvar al mantenimiento de la autonomía relativa del Estado con respecto al capital privado; además la autonomía es precisamente una condición *sine qua non* para la existencia de la planeación gubernamental. Precisamente es la autonomía indispensable requerida para que el gobierno de este Estado pueda dirigir el proceso de “salida” a la crisis, normando la actividad de todos los sectores de la economía y de las clases y grupos sociales respectivamente vinculados a ellos. En términos más concretos, la planeación implica que la burocracia pública tenga una mínima capacidad de actuación independiente real; la mínima para llevar a efecto la Alianza para la Producción.

El licenciado López Portillo ha afirmado que la Alianza para la Producción “no implica el debilitamiento del Estado, como la malicia exhibicionista lo pretende, sino, por el contrario, su fortaleza” (IX/2/77). En el marco de los acontecimientos presentes, la declaración del presidente de la República no deja de ser esencialmente la de objetivos por lograr, y hay indicios de que éstos están bastante alejados de su real consecución. La principal cuestión al respecto es si los grupos y fracciones más poderosos de la “iniciativa” privada no aprovecharán las contingencias, con perspectivas claras de empeoramiento,

para minimizar la autonomía relativa del Estado y hacer que haya un cambio sustancial —todavía más a su favor— en el contenido de los planes y en la política económica del gobierno del Estado mexicano. En caso de que la respuesta sea afirmativa no se podrá menos que colocar en tela de juicio la mencionada afirmación presidencial, calificándola de optimista.

Desde la perspectiva del actual gobierno, la crítica verbal a la posición oficial no es solamente sana, sino indispensable (IX/2/77). Sin embargo la posición de la gran burguesía, cuando por diversas circunstancias el gobierno no ha accedido a la defensa o mejoría de sus intereses inmediatos, es una presión real —y, las más de las veces, efectiva—; es una *acción político-económica* (por realización o por omisión), no una indefensa crítica intelectual o un mero enfrentamiento verbal. Contrario a la afirmación de López Portillo, en esa situación al Ejecutivo Federal no le queda sino “aceptar presiones” y actuar en consecuencia.

Es claro que el gobierno requiere —para la implantación de sus planes— de un margen de independencia que no tiene en la actualidad y que parece esmerado en conseguir (IV/27/77). Ello es perceptible a través de varios indicadores; tomaremos un ejemplo. En el caso concreto de la producción de alimentos básicos, la premura por resolver los problemas ha hecho que el aparato burocrático esté “quemando” las etapas —programadas por sus propios técnicos— de la Alianza para la Producción. En este marco debe considerarse el que, sin haber logrado aún los objetivos buscados, a fines de julio se anunciaba el paso a la segunda etapa de la Alianza. Conforme a ello, el gobierno divulgó ampliamente su suposición de que ya había sido lograda la “reorientación de la estructura productiva y de distribución”, de manera que era ya posible el abastecimiento adecuado, al mejor precio posible, de los artículos “socialmente necesarios”. Ahora sí, conforme al planteamiento oficial, una vez que la “reorientación” estaba hecha, se procedería a otorgar créditos selectivos para la fabricación de 26 productos alimentarios, que alcanzaría la suma de dos mil millones de pesos (VII/26/77). Pero el hecho es que para principios de septiembre sólo un porcentaje bajísimo del número de bienes, cuya producción había sido acordada por el capital, estaba siendo efectivamente elaborado y distribuido en los términos pactados.

En el caso de los planes gubernamentales para la producción de artículos “socialmente necesarios”, así como en la vasta generalidad de los pactos realizados entre gobierno y burguesía, el capital —a pesar de sus acuerdos formalmente iniciados en la práctica— no ha actuado (y todo parece indicar que tampoco va hacer en el futuro) conforme a los lineamientos del aparato burocrático (IV/27/77). ¿Cuáles son los factores que explican esta reticencia de la clase del capital, en cuanto a los planes y perspectivas gubernamentales?

i) *Esencial impotencia gubernamental para implantar compulsivamente sus planes*

Un primer factor estriba en que los esquemas propios de la burguesía, respecto a las formas en que se debe asumir el proceso de salida a la crisis, no concuerdan totalmente con los manejados en forma directa por el aparato burocrático; por ello, se dan las presiones consecuentes, destinadas a lograr la total identificación de ambos. En estas circunstancias, el gobierno federal está en fuerte desventaja para imponer sus condiciones. Ello se debe a que, en la formulación de un plan que tenga posibilidades reales de implementación, el Estado tiene —de partida— la limitante fundamental de contar con muy pocas facultades reales de intervención en materia económica. El gobierno del Estado mexicano, como el de todo Estado capitalista, carece de mecanismos realmente compulsivos que puedan obligar a determinada fracción o grupo del capital a orientar su producción en la dirección, con el volumen y en la calidad por él determinada (III/4/77). Puesto en palabras del propio presidente:

El Estado se empeñará en resolver la crisis con todos los recursos que un sistema democrático tiene, sin violar el esquema del Estado de Derecho, en el que se aplican las leyes que obligan y las que prohíben, y se aprovechan las facultades para convenir, estimular, desestimular y pensar (VIII/4/77).

Por la naturaleza de nuestro sistema de economía mixta, la acción del Estado debe ser esencialmente indicativa, orientando mediante estímulos la participación del sector social y del sector privado en nuestra vida económica y combinando con ellos la inversión pública. Este plan indicativo de desarrollo deberá desembocar en un sistema de planificación en que el Estado, a través de un diálogo franco con productores y consumidores, canalice el esfuerzo de todo el país hacia las metas específicas que exige nuestro desarrollo (7/30/77).

Esta verdad fundamental es lo que hace posible que las diversas fracciones del capital se autoconciban en entera libertad para cumplir o no con el compromiso contraído en diciembre pasado con López Portillo; es lo que permite que rechacen totalmente el esquema gubernamental, que se sometan parcialmente a él, o que sólo actúen conforme a los planes manejados por ellas. Tienen la clara visión de que, en última instancia, no se les puede obligar realmente a hacerlo (VII/4/77).

Con base en esta verdad, la clase del capital puede efectivamente presionar y negociar a su favor la política económica del gobierno. Para muestra un botón: de las medidas recomendadas en junio por el presidente de la Comisión de Exportación de Valores Invisibles, y expresidente de la Bolsa de Valores de Londres, al gobierno mexicano, la primera —que estriba en el

control de la inflación— estaba siendo implementada; la segunda —consistente en retardar la satisfacción de los requerimientos gubernamentales de capital para no dejar a un lado los del comercio y la industria— ya estaba llegando a su límite para esas fechas; la tercera —consistente en otorgar estímulos fiscales— estaba siendo ampliamente seguida, de hecho, porque al gobierno no le quedaba otro recurso, ya que las acciones en contrario eran “tiradas por la borda” por la presión de diferentes organizaciones de lucha del capital (VI/17/77).

ii) *La heterogeneidad del capital impide una respuesta única a los lineamientos gubernamentales*

La burguesía, por sus intereses económicos, está diferenciada internamente por: el monto de sus inversiones; el tipo de mercado a que se destina su producción; el grado de dependencia respecto al capital de las metrópolis internacionales; el nivel en que depende de la actividad gubernamental para su persistencia y expresión: el (los) sector(es) de la economía en que se ubica; el grado de “verticalidad” en su composición; el tipo y monto de mecanización que utiliza; el grado de extensividad e intensividad en que utiliza fuerza de trabajo; niveles de rentabilidad, productividad y explotación, etcétera. Por esta diferenciación interna, siempre habrá determinados ámbitos de las medidas globales contempladas en los planes gubernamentales, destinados a indicar el camino a seguir por la burguesía en su conjunto, que serán desatendidos en alguna medida por grupos o fracciones concretas de la clase del capital. Ante lo heterogéneo del capital, las “recomendaciones” presidenciales dirigidas al capital como conjunto serán seguidas por algunos de los sectores que lo componen y por otros no; ello estará en función de que estas recomendaciones beneficien o no a sus intereses.

Es con base a este contexto de real heterogeneidad del capital, que debe concebirse el que, en buena medida, las medidas gubernamentales en torno al crédito y en torno a la liberalización económica general no hayan redundado en los efectos formalmente esperados en cuanto a incrementar el volumen de inversión productiva. Desde la perspectiva gubernamental, la escasez de crédito y de recursos en general —en parte debido a que se ha llegado al nivel cercano al máximo posible del endeudamiento público— siempre representará el riesgo de que con ello se propicie el “círculo vicioso” de aumentos de precios y salarios, hasta llegar a lo alto de la espiral inflacionaria, que generaría aún más desempleo, menor producción y violencia (IV/21/77). La burocracia, por tanto, ha tomado medidas para combatir la escasez de crédito: redujo el encaje legal en marzo y en agosto, con el objeto formal de que el sistema bancario privado contara con fondos que permitieran la canalización de crédito hacia actividades productivas y prioritarias; aumentó las tasas de interés a los ahorradores, con la finalidad de que la banca privada pudiera

también disponer de mayores volúmenes de recursos destinados a apoyar las actividades recomendadas por —y pactadas con— el Ejecutivo Federal; a finales de agosto se decretó la liberalización de las tasas de interés bancario y financiero, con objeto de que la banca pudiera invertir con altas tasas de utilidades.

Sin embargo en este caso —como en muchos otros— de los intereses manifiestos del gobierno a las acciones reales de la burguesía hay un gran trecho. En primer lugar, falta todavía por ver si efectivamente el crédito será destinado, por la banca privada, precisamente a las actividades productivas o si, normado por el criterio de obtención de máximas ganancias, seguirán orientándose a la especulación (III/15/77). Además, aun bajo el supuesto de que efectivamente el crédito tenga esta “orientación productiva” por parte de la banca, la perspectiva de la inflación y el desempleo hace que el problema de la liberalización del crédito no sea susceptible de considerarse globalmente.

Desde el punto de vista de la gran burguesía, si el crédito se libera en la medida necesaria para abatir el desempleo, se agudiza la inflación; y, por otro lado, si la inflación se “lleva a cero” aumenta el desempleo, porque automáticamente deja de haber inversión (VII/2/77). Por tanto, el punto preciso a que el gobierno debe llegar para que el crédito sirva de “estímulo” real a la salida de la crisis —logrando que la clase del capital (en su conjunto) actúe conforme a los lineamientos de la Alianza para la Producción— es una cuestión difícil de lograr. Siempre habrá fracciones concretas de la burguesía que, o están en desacuerdo con la orientación “productiva” del crédito —y, por ende, intentan modificar el que el gobierno lo canalice en esta dirección—, o simple y llanamente no lo utilizarán. Para determinadas fracciones de la burguesía, el crédito manejado así sencillamente no va de acuerdo con su percepción de las máximas ganancias.

iii) *El gran capital ha fortalecido su posición política en el proceso de negociación de la política económica gubernamental*

En realidad, la Alianza para la Producción fue inicialmente formalizada —en diciembre de 1976— mediante un acuerdo entre el gobierno federal y 140 empresas industriales, con las cuales se pusieron en marcha comités mixtos para concertar la estrategia de la Alianza. El gran capital, representado en estas 140 empresas, tiene así asegurado un papel “productivo” en el proceso de implantación de los planes gubernamentales. Pero, incluso cuando actúe en este nivel productivo, la expansión económica del gran capital —dejada sin control gubernamental— puede hacerse sólo a base de la progresiva destrucción de las empresas de pequeña y mediana dimensión. Sin embargo, por su papel absorbedor de mano de obra, el gobierno no puede permitir en principio la supresión de la pequeña y mediana empresa por el gran capital; por

el contrario, en aras de la legitimidad, tiene que incluir medidas que le permitan sobrevivir, incluso encaminando en forma relativa grandes esfuerzos a apoyarla crediticiamente. De ahí que de hecho esté controlando la expansión del capital monopolístico.

Esto genera fuertes contradicciones en la dirección y en la implantación de la política económica que asumirá el gobierno. Si apoya en forma decidida al pequeño y mediano capitalista, se reducirá el sostén *relativamente* sustancial que hasta ahora ha representado el gran burgués. Si suprime el control indirecto sobre la forma de expresión del gran capital, no sólo se echará encima el pequeño y mediano empresario, sino que se generarán índices de desempleo mucho mayores que los que hasta ahora se presentan. El punto requerido es harto difícil de lograr; en estas circunstancias, la reticencia tendrá que ser forzosa (bien sea por parte del gran capital, o por parte del pequeño y mediano empresario), en cuanto a seguir los lineamientos gubernamentales.

Sin embargo hay indicios de que la contradicción se está resolviendo a favor del gran capital. Tomemos al respecto dos ejemplos. El 1º de septiembre López Portillo anunció que su gobierno "apoyó el establecimiento de la banca múltiple, lo que permitió abatir costos y elevar el nivel de competencia". Ello significa que el aparato burocrático ha asumido un papel activo en la integración vertical del capital: en el proceso de concentración monopolística de la fracción hegemónica de la burguesía. Este tipo de acciones a largo y mediano plazo debilitarán el papel del propio aparato gubernamental. Sus esquemas respecto al proceso de salida de la crisis, por tanto, se verán progresivamente identificados con los esquemas "puros" del gran capital. Habrá una cada vez mayor supeditación de la política económica gubernamental a estos intereses monopolísticos.

El otro ejemplo respecto al fortalecimiento del gran capital en el proceso de negociación de la política económica del gobierno es el caso de la liberalización de precios en la industria automotriz. La reducción del mercado interno ha ocasionado el derrumbe de venta y un ritmo impresionante de despidos de personal (V/21/77) en la industria. Esto ha llegado a extremos tales que ya para junio del presente año la industria automotriz estaba en crisis abierta; en los primeros cuatro meses del año la venta de autos había disminuido en 36 por ciento, y la producción se había abatido 35 por ciento (VI/10/77). Ello daría lugar al decreto presidencial de liberalización de los precios oficiales en la industria, anunciada por las dependencias gubernamentales directamente responsables de ello, como medida tomada a título de experimento. Sin embargo muchos de los objetivos manifiestos de la expedición de este decreto no han sido logrados en la práctica (VI/21/77). Lo que sí parece ser claro es que el decreto de liberalización económica de los precios de la industria automotriz indica que la burocracia está empezando a ceder abiertamente a las presiones cada vez más fuertes de los grupos del capital monopolístico-transnacional y de diversas fracciones incrustadas en la maquinaria corporativa y en el propio aparato de gobierno (VI/20/77).

iv) *Las controversias respecto al manejo del gasto público y de las empresas paraestatales*

Íntimamente relacionada con la heterogeneidad del capital, se encuentra el hecho de que la posición de la burguesía, como conjunto, ante aspectos importantes del ámbito estrictamente gubernamental —como el ejercicio de su presupuesto y el manejo de las empresas del Estado—, no es uniforme; su respuesta a los respectivos planes gubernamentales tampoco lo es.

El monto, estructura, destino y fuentes de financiamiento del gasto público es de primordial importancia en el marco de la posibilidad de que el capital actúe o no conforme a los lineamientos, indicaciones, estímulos y desestímulos gubernamentales. Todos estos aspectos se convierten frecuentemente en el origen inmediato de contradicciones secundarias entre las diferentes fracciones del capital. Ello es así en virtud de que la política económica estatal (en este caso particular, la posibilidad de liberar el gasto público) afecta de diferente manera a los diversos componentes sociales de la burguesía. El que el gobierno empiece a invertir o disponer de grandes magnitudes de su gasto público beneficia a los medianos y pequeños industriales y a los comerciantes, pero impide el proceso de concentración —basado en la incoastabilidad y cierre de las empresas de mediana y escasa envergadura— del gran capital industrial (VIII/9/77).

Lo que la burguesía en general sí tiene claro es que la Alianza para la Producción, vista en cuanto objetivos y en cuanto a la forma pretendida de su operación, realmente representa la identificación de intereses que existe entre aparato burocrático y capital privado. Por esta razón, ante la retracción aguda de la inversión privada, el gobierno se podría ver compelido para que liberara su gasto, “no para sustituir la inversión privada, sino para estimularla” (VII/23/77).

Sin embargo hay grupos y fracciones del capital que se identifican realmente como proveedores de bienes y servicios del gobierno; una “burguesía que crece a la sombra del Estado”. Éstos, en tanto el gasto público no se libera, pasan efectivamente por una severa crisis. Por esta razón, están interesados en la iniciación de las inversiones públicas en toda su envergadura (V/31/77). La presión de estas fracciones de la burguesía estará siempre presente en la cuestión de la liberación del gasto público. La posición contraria estaría representada por la aseveración de que, incluso con todo y “austeridad”, el gasto público actual es inflacionario, pues significa un aumento de 46 por ciento (a precios corrientes) con respecto al de 1976.

Hay una línea general en el actual régimen: no deteriorar las condiciones de vida de las clases explotadas más allá del máximo tolerable. “Las condiciones en que vive la clase trabajadora impelen al Gobierno de la República a acatar la responsabilidad de la estrategia económica sin demérito de su política social. Ninguna crisis puede variar esta estructura”.* Esta línea general

* Informe presidencial, 1º de septiembre de 1977.

es lo que ha llevado a influyentes sectores de intelectuales, de mediados de julio a la fecha, a llamar continuamente a una rectificación de la posición del gasto público; que pase de la actitud pasiva que hasta ahora ha mantenido, a convertirse de nuevo en estimulante de la inversión privada. Para ello se aduce que la rectificación del gasto público, aunada al abatimiento del circulante monetario (de 80 mil millones de pesos en diciembre de 1976, a 71 mil millones en mayo de 1977) no ha conducido a la inversión en los sectores básicos de la economía (industria eléctrica, petróleo, siderurgia y la industria de bienes de consumo popular) (VII/15/77). Por lo que no se ha abatido el nivel de desempleo y continúa la inflación.

Cediendo a las presiones de las fracciones de la burguesía, que resultan beneficiadas con la liberación del gasto público y en el marco de referencia del deterioro progresivo de las condiciones de vida de las masas populares, finalmente altos funcionarios anunciaron —a principios de septiembre— que el gasto público se liberaría a principios de 1978. Ello es augurio de fuertes presiones del gran capital, cuando se intenta hacer efectivo.

Otro punto importante de presión de las diferentes fracciones de la burguesía, en el cual no siempre hay coincidencia, está constituido por la política gubernamental respecto a sus empresas (VII/17/77). En este aspecto, el capital opera de manera semejante a la descrita en el caso del gasto público. Representando el hecho de que en este aspecto se cede a las presiones del gran capital, el anuncio final de la etapa de subsidios a las empresas en cuestión (VII/17/77) conducirá al cierre de buen número de ellas, con lo que la situación de desempleo y progresiva restricción del mercado interno se agudizará.

v) *La situación económica actual impide que la burguesía invierta "productivamente"*

¿El espíritu de sacrificio y respeto a los compromisos contraídos con el gobierno federal será tan fuerte como para hacer que los empresarios creen las industrias y empleos acordados? Todo parece indicar que no. La inversión es movida por la ganancia. Ningún empresario ha llegado al extremo de afirmar que su apoyo a López Portillo implique el que deje de tener utilidades. Los comerciantes, por ejemplo, han señalado claramente hasta dónde llega su sacrificio: tener márgenes de utilidad razonables para que éstos no coadyuven a la inflación, "pero sin tener una utilidad que sea nada más justificación de los gastos de operación" (IV/28/77).

La ciencia de la economía ha demostrado que la inflación es una abundante fuente de acumulación y concentración de capital. Por ello, el problema más serio con que se topa el aparato burocrático para que efectivamente se den las medidas que ha planeado para combatir la inflación, es que el capital de mayor envergadura obtiene ahí altos volúmenes de ganancias inmedia-

tas-extraordinarias. La gran burguesía está de hecho interesada en que continúe el aumento en los índices de precios (III/13/77). Ante esta realidad concreta, las llamadas gubernamentales para que no se especule aludiendo a la conciencia moral, cívica y patriótica, no resultan más que plañideras inútiles. La reticencia de la inversión "productiva" privada redundará en que no solamente no se logrará aumentar en 5 por ciento la cantidad que del producto interno bruto se invierte, sino que incluso se tendrán dificultades para sostener su nivel actual del 20 por ciento. Ante este hecho real, las medidas gubernamentales antiinflacionarias de corto y largo plazo (V/8/77) son de dudoso éxito, pues simplemente no serán acatadas a profundidad. La negativa del capital a invertir productivamente, por tanto, conducirá al cumplimiento de la predicción de una de las principales instituciones privadas bancarias, en el sentido de que durante 1977 el crecimiento del Producto Interno Bruto podrá aumentar sólo 3 por ciento, para llegar al 5 por ciento durante 1979 y 7 por ciento para 1980 (VII/2/77).

Si se parte de que lo que persiguen los capitalistas —aquí y en todas partes— realmente es la reproducción de su capital, resulta casi utópico pensar que retornarán todos los capitales sacados del país con anterioridad a la devaluación de 1976. Dada la ubicación del mismo, es muy probable que los empresarios que toman como excusa el no invertir hasta que regresen, se van a quedar mucho tiempo esperando (VII/21/77). Una buena parte, en definitiva, no retornará (VI/21/77), pese a que el contenido de los planes gubernamentales al respecto persigue lo contrario.

En un marco general de falta de inversión, no adecuado nivel de generación de empleos y persistencia de la inflación, el mercado continuará en su clarísima tendencia a la contracción, a pesar de los proyectos y planes gubernamentales para salir de la crisis. Una de las manifestaciones de lo anterior consiste en que se darán innumerables quiebras de pequeños y medianos capitalistas, y en que incluso el gran capital estará en dificultades —no insalvables. El caso de la industria siderúrgica es ilustrativo de esto último. Ésta se ha retraído, bajando en junio 9 por ciento el volumen de acero producido con relación a mayo, y en mayo se redujo 11.1 por ciento con relación a abril (VII/17/77). Sólo la Fundidora de Monterrey, durante 1977, perderá 1 300 millones de pesos.

En la crisis económica actual, cuando la inversión "productiva" se encuentra retraída y es substituida frecuentemente por la especulación, los intentos oficiales de fomentar —mediante la creación de un fondo de financiamiento de 11 000 millones de pesos— la construcción de máquinas que fabriquen máquinas difícilmente pueden llegar a feliz término (VII/20/77). ¿Quién compraría los bienes de capital producidos?

Por todos los factores anteriores, la devaluación no ha tenido realmente los resultados programados por el gobierno. Las exportaciones han aumentado —en términos reales— en muy pequeña escala: de septiembre de 1976 a marzo de 1977 los ingresos de divisas en pesos mexicanos aumentaron drásticamente, sólo que en dólares se redujeron ligeramente (VI/13/77). Por el

contrario, la flotación ha traído como consecuencia un fuerte proceso de "dolarización" de la economía del país (V/9/77); las medidas gubernamentales tendientes a evitarla parecen encaminarse a tapan el dique con un dedo.

La situación de la debilidad en la paridad monetaria se agrava por la presencia constante de la posibilidad de agudizamiento de la inflación. Si no se logra detener la inflación, habrá considerables bajas en el peso mexicano (III/2/77). Representantes de consorcios de investigación del sector privado (IV/28/77) incluso han afirmado que la estabilidad monetaria débilmente alcanzada podría peligrar si, por alguna causa, la inflación durante 1977 rebasa el 20 por ciento. El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sonora ha señalado la posibilidad de que para fines del año actual la paridad del peso con respecto al dólar sea de 28.1 (VII/11/77). El espectro de posibles nuevas pérdidas en la paridad mencionada es un factor muy poderoso que frena la inversión "productiva" privada; lo paradójico es que esta posibilidad es alimentada en la medida en que la burguesía no invierta en estos términos. Aunque los "lineamientos" gubernamentales así lo señalen, y por más "estímulos" y "facilidades" que se den, el empresario capitalista difícilmente va a hacer lo contrario.

Los planes gubernamentales justificaban la devaluación del peso en el sentido de que ayudaría a substituir importaciones. Ello hubiera sucedido, indudablemente, si el capital hubiera asumido en la realidad el papel que en abstracto le fue asignado en los planes gubernamentales. Como no ha sido así, la "flotación" realmente ha desembocado en que los bienes que desde antes se importaban, continúen adquiriéndose en la actualidad, pero a precios mucho más elevados (VII/2/77). Dado el tipo de bienes que se importan, de hecho el decrecimiento del déficit de la balanza comercial (66.4 por ciento durante enero y febrero de 1977, en comparación con igual periodo de 1976) significa en la realidad una disminución en la adquisición de productos esenciales para la marcha de la economía. Éstos no se compran, no porque ahora se produzcan en el país los bienes que antes se importaban, sino simple y llanamente porque se han abatido los niveles de los recursos necesarios para adquirirlos (III/25/77).

Una buena prueba de que la reducción del déficit comercial no significa, en la coyuntura nacional y mundial actual, un signo de éxito de la política económica programada por el gobierno, estriba en que en la reunión de los "20", celebrada a fines de abril, la delegación mexicana afirmó que los países pobres importarían menos si los países industrializados no eliminan las barreras comerciales a los productos que exportan. En este argumento se utiliza la disminución de las importaciones como un indicador de empobrecimiento, no de progreso (IV/29/77).

En el marco de la crisis presente, no se puede estar demasiado seguro de que no redundarán en sentido contrario la anunciada eliminación de políticas proteccionistas y su sustitución por medidas que pretendidamente alienten la producción (IV/17/77), o de que los estímulos crediticios oficiales a las ex-

portaciones permitan llegar siquiera cerca de las metas propuestas. Respecto a este último punto, el ejemplo de las metas del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX) es ilustrativo; en este caso concreto, las empresas que reciban crédito tienen el compromiso de duplicar sus exportaciones en el término de un año (VII/26/77).

vi) *El carácter transnacional del gran capital como obstáculo a su mínimo control gubernamental*

El gran capital en México es fundamentalmente transnacional. Si el capital extranjero afluje al país, es porque aquí tiene más posibilidad de crecer y multiplicarse que en su país de origen. Sólo bajo estas condiciones se presenta en el país. En el momento en que esta situación no se dé, el inversionista extranjero simplemente no exportará su capital al país, o sacará el que ya está instalado. Ello minaría en forma seria las bases de la posibilidad de efectivamente llevar a la práctica los planes gubernamentales o conformados en torno a la Alianza para la Producción (II/26/77).

Esta situación, aunada a que se admita oficialmente que durante los próximos dos años será inevitable que el aparato gubernamental siga dependiendo en gran medida del financiamiento internacional para llevar sus continuos déficits presupuestales (VII/14/77), con lo que su grado de dependencia respecto al exterior crecerá aún más en términos políticos, se convierte en un factor de debilitamiento de la posición directiva del aparato burocrático del proceso de salida a la crisis. Si la burguesía "nacional" no responde realmente a las expectativas gubernamentales en cuanto a lo que debe hacer para salir de la crisis, con mucho menor posibilidad lo hará el gran capital transnacional. Estas fracciones del capital no sólo invertirán dónde, cuándo y en los volúmenes señalados como convenientes por sus intereses, sino que están en una excelente posición para presionar al gobierno con objeto de que éste se convierta en su fiel servidor.

Un ejemplo que aclarará este asunto. La necesidad estratégica del petróleo mexicano para la economía norteamericana hace que este sector sea uno de los más receptivos de inversiones de la burguesía de ese país, o incluso de su propio aparato gubernamental (V/21/77). De hecho, un renglón en que los Estados Unidos no escatimarán el otorgar créditos al gobierno mexicano, es el del petróleo, porque éste representa una fuente de aprovisionamiento abundante y relativamente barata (VI/1/77). Y es precisamente en este renglón que se presionará al gobierno, con el apoyo de la burocracia de la metrópoli internacional: se coadyuvará al logro de buena parte del contenido de los planes gubernamentales para salir de la crisis, evitando que haya deportación de braceros y oponiéndose al cierre de maquiladoras en el país, siempre y cuando haya petróleo mexicano que surta la economía norteamericana. Además, en este proceso de negociación, el capital transnacional cuenta

con el apoyo de la buguesía del país, porque ello va en beneficio de sus intereses. Curiosamente, en el renglón del petróleo también están vivamente interesados los capitalistas "mexicanos"; los empresarios de Monterrey, por ejemplo, construirán el gasoducto sur-noroeste, de 1 200 kilómetros de longitud, que costará 22 000 millones de pesos, los cuales se obtendrán con financiamiento externo, principalmente de Norteamérica (VI/1/77).

Si la presión no resulta eficaz para el capital transnacional, simplemente congelará sus inversiones o —en el peor de los casos— se retirará del país. Recuérdesse al respecto que Henry Ford II, aduciendo el trato discriminatorio que recibe el capital extranjero en el decreto presidencial que establece la liberalización de precios de la industria automotriz, anunció que a partir de entonces las inversiones en México de la Ford Motor Company estarían paralizadas (VII/9/77).

vii) *La crisis en Estados Unidos como obstáculos a los planes del gobierno mexicano*

La crisis mundial actual ha hecho que tomen medidas proteccionistas los aparatos gubernamentales de las principales metrópolis del capitalismo a nivel internacional. Ello hace suponer que el mercado norteamericano no se abrirá a los productos mexicanos tanto como lo desearían el gobierno y las fracciones de la burguesía fundamentalmente orientadas a la exportación de sus productos. Esto, además, sucede en circunstancias en que el gobierno reconoce (IV/1/77) que más importante que la inversión directa estadounidense para salir de la crisis, es la certeza de contar con el mercado de Estados Unidos como asimilador de los bienes de exportación que se encuentra empeñado en estimular.

Para mayo del presente año la crisis de la economía norteamericana era tal que había 7 millones de trabajadores sin empleo, y el aumento de su Producto Nacional Bruto en el primer trimestre del año había sido menor del 4 por ciento. Ello determinó, por un lado, el que se tomaran fuertes medidas proteccionistas: se eliminaron 63 productos mexicanos, la mayoría de manufactura, de la lista del Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos, lo que significa que éstos pagarían a partir de entonces impuestos por su importación a ese país (III/25/77). Además se sentaron las bases necesarias para posibilitar el regreso masivo de braceros mexicanos; para abatir el nivel de "negatividad", ante los ojos del gobierno mexicano, se hizo coexistir esta medida con un tibio proyecto, poco probable de aprobación por el Congreso norteamericano, y por el presidente en turno en los Estados Unidos (VIII/8/77). Esto daría al traste con buena parte de los programas gubernamentales de México —al menos en lo que toca al desempleo, para hacer posible la salida a la crisis. En este contexto de posible repatriación masiva, las medidas de emergencia tomadas por el gobierno mexicano para cambiar

el lugar de destino del 10 por ciento aproximado de la población total del país que habita en los Estados Unidos, que resultaría afectada —concretamente, los acuerdos tomados con el director de Industria y Turismo del gobierno del Canadá, en el sentido de abrir la contratación de trabajadores migratorios mexicanos en aquel país— serán un pobre sustituto de esta fuente de empleo (II/27/77). La agravación del desempleo y desocupación se dejará sentir, particularmente, en el medio rural.

Además el gobierno tiene programado el que las maquiladoras representen un elemento más de alivio en la reducción del ritmo del crecimiento del desempleo. Sin embargo, en el contexto de la crisis norteamericana, siempre estará presente la posibilidad de su salida del país por la presión de los sindicatos norteamericanos sobre el gobierno estadounidense, independientemente de que su nivel de producción se mantenga a un nivel muy bajo, porque el funcionamiento pleno de ésta requiere de materias primas producidas en México por valor de 50 millones de pesos (III/4/77); volumen que actualmente no es satisfecho.

En síntesis, si los Estados Unidos persisten en su política proteccionista, gran parte de las medidas incluidas en los planes gubernamentales de salida a la crisis, en la Alianza para la Producción, en concreto, no solamente no surtirán efecto, sino que ni siquiera serán acogidas por el capital.

De esta manera, la posibilidad rectora del gobierno en la delimitación e implantación de sus planes para salir de la crisis se ve obstaculizada por la reticencia del capital privado para asumir en la realidad el papel que le es “señalado” e “indicado” por la fracción hegemónica de la burocracia pública. La burguesía, considerada en su conjunto, no responde a los “estímulos” y “desestímulos” que están formalmente incorporados en los planes gubernamentales. La presencia real de los empresarios en la Alianza para la Producción ha sido en muy pequeña escala (VI/12/77). Por ejemplo, luego de más de 9 meses durante los cuales la clase del capital había estado esgrimiendo argumentos en torno a la necesaria “devolución de la confianza”, sólo una cuarta parte de los capítulos privados retirados del país habían regresado (VII/9/77).

La burguesía, en términos generales, no ha respondido a los llamados a la inversión productiva, a pesar de todo tipo de facilidades otorgadas por el aparato burocrático (V/10/77). El hecho es que son contados los empresarios que están dispuestos a “asumir el riesgo de generar confianza invirtiendo”. Más bien la burguesía en general espera a que la confianza llegue a niveles juzgados por sus componentes como adecuados para invertir. Es decir, se percibe la obtención de confianza como una condición previa para invertir, y no al contrario; ésta es la lógica del capitalista. Esto, sin lugar a dudas, pone de cabeza, en el plano real-concreto, los planteamientos gubernamentales formulados en abstracto.

Pero no sólo eso; las fracciones más fuertes de la burguesía están emprendiendo medidas reales destinadas a hacer lo más racionales y eficaces posibles —dentro de su concepción y de acuerdo a sus intereses específicos—

sus actividades políticas. En este sentido, es importante señalar que algunos organismos de lucha del gran capital se encuentran enfrascados en la organización de unidades de análisis sociopolíticos, que estarán a cargo de politólogos, sociólogos y economistas. Las profundas implicaciones que ello representa señalan una tarea impostergable a la ciencia social que aspira a conocer los cambios que se dan en la actualidad: el análisis profundo y sistemático de la actuación política de la burguesía en la presente crisis.

Ante la posición real de la clase del capital, el gobierno ha tenido que anunciar, reiteradamente, la postergación de la etapa de recuperación que permita la generación de empleos, el abatimiento sustancial y real de la inflación y el aumento de la producción para el mercado interno y externo. En ocasiones incluso ha ido más allá: altos funcionarios de la burocracia han señalado que será responsabilidad de los sectores empresariales si —porque no cumplen con su parte en la Alianza para la Producción— se limitan las posibilidades de crecimiento económico (VI/19/77).

c) *La maquinaria corporativa del Estado: factor importante de presión*

Ya desde abril se anunciaba que la inflación durante 1977 sería “sólo” del 20 por ciento, si todos los sectores “cooperaban” (IV/12/77). Como ya se ha visto, la cooperación, en lo que se refiere a los empresarios —inversiones en actividades productivas generadoras de empleo y no realización de actividades especulativas, principalmente— no se está dando. Por tanto, es muy posible que la inflación rebase con mucho esta cifra. Al menos hay indicios que permiten esperar que ésta se incrementará sustancialmente durante los próximos cuatro meses del año: los aumentos en las tasas de los préstamos hipotecarios y la liberación de las tasas de interés del crédito en general; el 10 por ciento de aumento en los salarios del personal del sector público; posibles aumentos salariales en otros sectores, y el aumento —dentro de tres meses— del volumen de monetario a causas de la compensación navideña a los asalariados del país (IV/10/77).

La tendencia al alza de precios es particularmente clara en el caso de productos alimenticios. Tratándose de estos bienes es muy difícil lograr evitar una carrera de precios e inflación galopante, ya que la oferta de ellos es mucho menor que su demanda (III/31/77). Éste es el caso de la harina de trigo, el pan y de la leche. El alza del precio de estos últimos productos, y la inminencia de un aumento en el precio del huevo, determinó contingencialmente que el Congreso del Trabajo anunciara que tomaría medidas para enfrentarse a la disposición gubernamental que autorizaba los aumentos (VIII/21/77). La toma de posición del Congreso del Trabajo en esta ocasión es importante: tiene por lo menos una doble significación; por un lado, es el reflejo de su actuación ante las perspectivas inmediatas de su pérdida de control político interno; por otro lado, constituye la manifestación del au-

mento en su fuerza de negociación política *externa*, en particular con respecto al aparato de gobierno.

En el ámbito externo, ante acontecimientos como el señalado, uno podría preguntarse si los principales componentes de la maquinaria corporativa del Estado, ante su percepción de que los precios suben porque los empresarios "chantajejan" al gobierno, no intentarán aumentar su presión sobre el aparato burocrático (VIII/23/77), y la medida en que la coyuntura actual permitirá que ello se haga eficazmente.

El planteamiento del secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria, respecto a la relación de fuerza burguesía-gobierno, parece ser ilustrativo de la posición del Congreso del Trabajo: los empresarios chantajejan al gobierno al exigirle ventajas a cambio de invertir, en un afán de volver a la negativa época del desarrollismo. Los inversionistas no sólo pretenden que el gobierno no invada áreas que consideran suyas, sino que ahora quieren entrar a terrenos del gobierno, principalmente a PEMEX, empresa que ha ofrecido comprar con capital nacional y extranjero (VII/15/77).

Lo que es claro es que la fuerza política del Congreso del Trabajo ha crecido considerablemente en el contexto de las medidas gubernamentales para sortear la actual crisis. Ello parece partir de la concepción de que, con las medidas gubernamentales, la inflación ha sido contenida artificialmente (IX/9/77), y de que en cualquier momento puede agudizarse. Precisamente por ello, y con motivo de la mencionada alza en el precio de la leche, autorizada por la Secretaría de Comercio, obtuvo que en el futuro, "previamente a cualquier decisión (de la Secretaría de Comercio), habrá una mayor comunicación entre la Secretaría y los responsables de la dirección del movimiento obrero organizado" (VIII/25/77).

En este sentido, la multicitada alza de precios parece haber sido el "punto de toque" para que los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado, particularmente los del movimiento obrero "organizado", se autoatribuyeran el papel de dirigentes del "pueblo" en general, en lo que respecta a la lucha contra la inflación (VIII/22/77). Esto indica, sin duda alguna, que la maquinaria corporativa del Estado está ganando independencia y que realmente está dispuesta a incluir en la contienda los planes y proyectos del gobierno y el proceso de su implementación. El secretario general de la Confederación Regional Obrera-Campesina afirmaba el 21 de agosto:

Los altos funcionarios, principalmente los cercanos colaboradores del Presidente, tienen que ser más responsables porque no es ya el momento adecuado para que se provoque tanto al pueblo. En México debe adoptarse el sistema de salarios móviles, que suban en la misma proporción que el costo de la vida... Los sindicatos están dispuestos a iniciar las acciones que el pueblo quiera para frenar el incremento de los precios.

El secretario general de la CTM, en su informe a la LXXXIX Asamblea Nacional de esa organización, decía: "La CTM se siente copartícipe de la

responsabilidad nacional, apoya las decisiones del Estado, *siempre que tiendan al beneficio colectivo*" (VIII/25/77).

El gobierno parece estar aceptando, como algo saludable, este aumento en la fuerza política del movimiento obrero corporativizado. Esto es particularmente claro en las palabras del secretario de Comercio, a raíz de la visita efectuada en su despacho por los principales dirigentes del Congreso del Trabajo:

Con justa razón, los dirigentes obreros me hicieron ver que no solamente tienen la representación de los trabajadores organizados del país, sino que de alguna manera les preocupa representar a los trabajadores no sindicalizados, incluso a quienes no disfrutan ahora de un empleo. Por eso resulta muy importante para la Secretaría de Comercio poder contar, en futuros análisis que eventualmente hubiese que hacer modificaciones de precios en alimentos básicos, con el criterio, la ayuda y la orientación de quienes tienen la responsabilidad de representar a la mayor parte de los trabajadores mexicanos (VII/25/77).

El hecho es que los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado mexicano están ahora en posibilidad —y tienen la necesidad, so pena de debilitar seriamente el control político que ejercen sobre sus agremiados— de superar las meras reivindicaciones económicas para hacer patente su poder en la definición de la política económica gubernamental. Puesto en las recientes palabras de un expresidente del CEN del PRI: "Nosotros, los miembros del Institucional, tenemos que entender que o marchamos con el pueblo, o el pueblo marchará sin nosotros" (IX/9/77).

Las necesidades —que emanan de su propio ámbito interno— para que la maquinaria corporativa del Estado asuma esta posición, son muy fuertes. O se asume de alguna manera la defensa contra el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores "organizados" —y, con ello, del "pueblo en general"—, o se generalizará un progresivo escape a los ámbitos de control de las demandas sostenidas por elementos de la propia maquinaria corporativa. Esto es una posibilidad muy real; sus primeras manifestaciones están al alcance de la vista. Muy recientemente (IX/9/77), los Comités Ejecutivos Locales de las Secciones 66, 67 y 68, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, publicaron un desplegado en que apoyan la posición de su secretario general —quien es también presidente del Congreso del Trabajo—, a la vez que se plantea una posición muy radical respecto a la vinculación actual entre burguesía y gobierno; posición que aún no implica un enfrentamiento frontal con los planes del gobierno, pero que perfila una tendencia que puede llegar a serlo.

Pero hay otra gran fuente de obstáculos a la efectiva dirección gubernamental en la implantación de sus planes. El aumento de la presencia política de la maquinaria corporativa en el contenido y en la dirección de la posición

gubernamental se debe fundamentalmente a las acciones que ha venido desarrollando principalmente el sector obrero corporativizado. A diferencia de ello, tal y como fue reclamado por el secretario general de la Confederación Campesina Independiente, el campesinado "organizado" ha tenido hasta ahora bien poco que decir y hacer en el proceso de negociación de la política económica del gobierno y en la lucha "por defender" la economía popular (VIII/30/77). Al respecto, hay indicios de que los dirigentes del "sector campesino" intentan acrecentar su participación en la definición del rumbo que tome la rectificación de la economía.

La agricultura, por ser el sector más atrasado, tiene el peligro de ser precisamente el más golpeado por la inflación, la baja de la producción y el desempleo (V/14/77). Un gran número de factores señalan que los objetivos gubernamentales tendientes a lograr que la agricultura crezca —a partir de 1977— a un ritmo anual real del 5 por ciento, sólo para superar el hecho de que en 1976 bajó a menos de 1 por ciento, y lograr la autosuficiencia en dos años, son difícilmente alcanzables. Por ello, se reconoce oficialmente que, aun suponiendo que se apliquen las medidas programadas por el Estado, no se resolverá la crisis agrícola en el corto plazo. Por ejemplo, será necesario importar para este año un millón de toneladas de maíz, por valor de dos mil millones de pesos (II/25/77). Y si, en el corto plazo, las metas no son fácilmente aprehensibles, la pretensión de que en el mediano plazo (para el año 2000) se cuadruplique la producción agrícola a fin de satisfacer las necesidades alimenticias que se tendrán para esa fecha (V/29/77), aparece aún más distante.

Por esta razón los componentes de la maquinaria corporativa del Estado en el agro están en posibilidad de aumentar su fuerza en el proceso de negociación de la política económica, presionando en ocasiones al gobierno para que acepte actuar algunas veces bastante más allá de los límites en que éste ha pactado mantener con el capital. Con diversas manifestaciones recientes, las organizaciones campesinas demandan participación política real, al igual que el movimiento obrero, en el proceso de dirección gubernamental de las modalidades que asuma el desarrollo agropecuario. Para ello, afirman, es necesario complementar la acción de la CNC y de la Confederación Campesina Independiente y ser copartícipes en la planeación y ejecución de las actividades que al respecto defina y efectúe el aparato burocrático del Estado:

Se necesita una legislación para llevar adelante los propósitos que el Gobierno ha dado a conocer acerca de la producción agropecuaria... Sin embargo no debe ponerse en práctica ninguna ley para el campo donde participen sólo tecnócratas o políticos, ya que de legislarse para la producción del agro deben cuidarse los derechos políticos de las organizaciones que se pretenden crear (VIII/24/77).

Esto coloca al gobierno en una situación difícil. Ya se han visto someramente las dificultades que el gobierno tiene para la implantación de los

planes y programas gubernamentales con respecto a la economía en general, en particular con referencia a su aceptación por parte de la burguesía. Esto es especialmente válido en el caso del proceso de negociación de la porción de la política económica gubernamental que tiene como objetivo al agro. Recuérdese que hay una vinculación esencial entre la manera en que marcha el gobierno y los intereses de fondo del capital privado.

Sólo en la medida en que la política agrícola del Estado responda directamente a sus intereses, como en el caso de la elevación de los precios de garantía, recibirá el apoyo de las fracciones de la burguesía con ámbitos de acción fundamentalmente establecidos en el campo (VI/9/77); de lo contrario, se opondrá a ella (como en el caso del intento de aumentar los impuestos pagados por los "pequeños propietarios"). Si el "recelo" de la burguesía no se ha eliminado totalmente en lo que toca a una política claramente orientada al fortalecimiento de la empresa capitalista agropecuaria, mucho menos va a aceptar plácidamente el más leve viso de que proposiciones como las de la CCI —miembro del "Pacto de Ocampo"— que sostienen que "se entregue a los productores de materias primas rurales una participación por valor agregado de sus cosechas, con base en las utilidades de las empresas transformadoras" (VIII/30/77), sean efectivamente incluidas en los planes gubernamentales.

Pero los obstáculos a la dirección efectiva de los planes gubernamentales en el agro no provienen sólo de la maquinaria corporativa del Estado. Incluso en la Cámara de Diputados han surgido voces de alerta contra la marcha emprendida por el gobierno en el campo. La destrucción del sistema ejidal y el abatimiento absoluto del gasto público conduciría —según estas opiniones— a una situación "caótica e inmanejable". Sin embargo señalan que únicamente debe acabarse con el sistema ejidal desfavorecido mediante su fortalecimiento, no mediante su destrucción (VI/2/77).

Por otro lado, en las regiones tropicales y subtropicales del país siempre obrarán en contra de los planes federales las experiencias previas tenidas en materia de organización y de intentos de desarrollo de estas áreas; experiencias iniciadas masivamente desde finales de la década de los cuarentas con la creación de la Comisión Ejecutiva del Río Papaloapan, hasta llegar a los muy recientes programas de colonización emprendidos a finales del régimen pasado (IV/24/77).

Por último —no por obvias son menos importantes—, sequías (V/2/77), plagas y otros fenómenos naturales adversos, representan siempre un factor no totalmente previsible que puede obstaculizar el que la actuación de los aparatos económicos de poder en el campo sea efectivamente de acuerdo a lo programado.

III. *Balance y perspectivas*

El gobierno aparece como la instancia del Estado mexicano que está más

activamente empeñada en mantener su capacidad para dirigir la manera conforme a la cual se está dando la “salida” a la crisis actual. Para ello ha formulado una serie de planes y programas y ha concertado formalmente una Alianza para la Producción con diversos actores sociales. Sin embargo en el inicio mismo de la implantación de las acciones implicadas en sus planes y en la Alianza están ocurriendo sucesos que indican la presencia de obstáculos de diversa magnitud en la implantación real de las mismas. Estos escollos repercuten en que continuamente se negocie el contenido de los proyectos gubernamentales, lo que hace prever que llegará al momento en que su contenido real-actualizado se distanciará del contenido original —versión, por ejemplo, de marzo de este año— del mismo.

Por principio de cuentas, el contenido de los planes gubernamentales se ve presionado, desde su propia casa, por la presencia de dos fuertes corrientes políticas divergentes —no hegemónicas—, cuyos componentes ocupan principalmente escaños de diversas jerarquías en el gobierno federal, en algunos gobiernos estatales y en el Congreso de la Unión. Pero las más significativas presiones que recibe al respecto provienen del ámbito externo a la propia burocracia. El capital —como conjunto, aunque hay notables diferencias, según las fracciones diferentes que en su interior existen— presenta una posición conservadora que en ocasiones no acata los lineamientos gubernamentales, en otras no respeta los acuerdos formalmente contraídos y en límites extremos propone la inclusión, modificación o supresión del contenido de los planes gubernamentales originales. En este sentido, parecerían atinadas —en términos generales— algunas de las conclusiones del presidente del Segundo Congreso Nacional de Economistas:

La posición conservadora de los empresarios les impide comprender la situación que vive el país. Asimismo la élite de ingresos medios y altos de la población no tiene coincidencia nacionalista. Así no pueden estar de acuerdo en modificar un sistema que les beneficia con largueza y su actitud es antisocial por definición (V/3/77).

En un plano más concreto, sin embargo, la burguesía es efectivamente “antisocial”, no por su incomprensión de la situación en que vive, sino porque precisamente —de acuerdo a su propia lógica— la conoce muy bien. En primer lugar, la clase del capital se puede dar el lujo de mostrarse “reticente” respecto a su participación en los términos “indicados” por el gobierno, porque sus dirigentes saben que el gobierno no puede obligar en la práctica a un empresario a actuar de tal o cual forma en lo que respecta a la manera en que produce y reproduce su capital.

Precisamente porque saben que la economía capitalista está sujeta a una dinámica propia, con leyes internas específicas, es que las fracciones más fuertes han agudizado su perpetua tendencia a tratar de que sean idénticos sus propios proyectos y esquemas de desarrollo —en este caso, su modelo de

acción para salir de la crisis— con los planes que al respecto tiene el gobierno. Como no lo han podido lograr, sólo está siguiendo aquellos lineamientos gubernamentales que en el plano inmediato satisfacen sus intereses.

Ello está redundando en una progresiva disminución de la autonomía relativa del Estado mexicano, porque el gobierno de este Estado cada vez más se acerca más a la posición del capital; como contrapartida, se está fortaleciendo la fuerza y la capacidad de negociación política de la fracción hegemónica del capital. Con ligeras variantes, esta presión se manifiesta agudamente en cuestiones de tanta importancia como la forma en que el gobierno maneje y distribuya su gasto y la manera conforme a la cual debe organizar sus empresas. El gran capital es el que está saliendo beneficiado en la solución de la contradicción secundaria capital privado-gobierno.

Por su carácter fundamentalmente transnacional, el gobierno no tiene ninguna forma de controlar —así sea a través de estimular y desestimar, directa o indirectamente— a esta fracción. Además la burguesía en el fondo está interesada en que siga la inflación. La crisis internacional y el consecuente proteccionismo de las principales metrópolis internacionales —principalmente del crecimiento de las medidas encaminadas a restringir las importaciones, llevadas a cabo por el gobierno de los Estados Unidos—, aunado al acrecentamiento de la posibilidad de que la paridad peso-dólar disminuya aún más, hace que la burguesía generalmente no invierta en los términos “productivos” señalados por el gobierno, sino que ésta destine mucho más frecuentemente sus recursos a la especulación. Mientras obtenga ganancias altas y seguras, al empresario poco le importa que se generen empleos, que el mercado interno se contraiga, que se produzcan alimentos muy por abajo del mínimo indispensable, que las exportaciones se reduzcan, que las condiciones materiales de vida de las masas trabajadoras y desempleadas lleguen a niveles cerca de lo políticamente suicida y que es posible el surgimiento de movimientos de violencia espontánea.

Ello explica el que, a una distancia enorme de las metas originalmente programadas, los logros obtenidos durante el primer semestre de 1977 consistían sólo en la creación de 1 757 empresas nuevas; en cambio, 5 000 pequeñas y medianas empresas habían quebrado por falta de crédito y se preveía que 2 500 más tendrían que hacerlo durante el segundo semestre del año.

En todos estos aspectos, el gobierno, en cambio, sí está interesado, no porque sea benefactor social, sino porque en ello va su interés de seguir haciendo posible el mantenimiento de las condiciones políticas e ideológicas que permitan continuar la reproducción del capital en la sociedad mexicana. Pero, precisamente por ello, el problema que se le plantea para “sujetar” a la burguesía a sus proyectos no es de fácil solución. Aun cuando se legislara —cosa por demás improbable— para obligar al capital a participar controladamente en la Alianza para la Producción, se produciría un alejamiento enorme entre norma jurídica y realidad.

Por esta razón, ya para mediados de julio, prestigiados economistas sostenían la necesidad de substituir al modelo de crecimiento de “estabiliza-

ción-fluctuación-recesión" —a lo largo de cuyas líneas generales parecía haberse estado moviendo la política económica gubernamental— por el de "recuperación a corto plazo y crecimiento sostenido", ya que el primero implicaba el empobrecimiento progresivo de las clases más necesitadas". El segundo, en cambio, que giraría sobre el crecimiento del sector agropecuario y del petrolero, permitiría alcanzar, en términos cortos, tasas de crecimiento similares a los de Estados Unidos (VII/16/77).

Para fines de agosto cada día se hablaba más del inminente fracaso de la política económica del gobierno y de la necesidad de rectificación. En la producción de alimentos, concretamente, se empezó a señalar cada vez con más insistencia la necesidad de nacionalizar la gran industria alimentaria, declarándola de "interés social" (VIII/24/77). Curiosamente, de seguro por la presencia de alguno de esos "procesos mágicos" implicados en el juego de la política mexicana, después del 1º de septiembre estas apreciaciones críticas han disminuido en forma considerable.

Pero los problemas para el gobierno, en cuanto a lograr que sus planes se delimiten, primero, de manera más o menos definitiva, y se acepten en la práctica, después, no terminan ahí. El capital lo presiona continuamente para que asuma un papel cada vez más claro y directo de defensor de sus intereses. Pero la maquinaria corporativa del propio Estado lo presiona en sentido contrario. En este sentido, juega un papel saludable en la perspectiva de mantenimiento de cierta independencia gubernamental.

Tanto el Congreso del Trabajo como el Pacto de Ocampo pueden ahora entablar una negociación más directa de los lineamientos concretos del gobierno en lo que respecta a sistemas deseables de comercialización, al incremento de la participación del Estado en la economía, a su participación en diversos sistemas administrativos y —de manera muy importante, porque es un punto especialmente sensible para las empresas— en lo que respecta a la política de precios.

En la mayoría de los casos, la posición del movimiento obrero y campesino "organizado" y la posición del capital es diferente. El punto de vista del primero no surge porque repentinamente este tradicional sostén estatal se haya convertido en la vanguardia del movimiento revolucionario del país. Es todo lo contrario; precisamente para continuar controlando la potencialidad revolucionaria de los obreros y campesinos, es que tiene que asumir —en parte realmente y en gran parte sólo formalmente— una posición de defensor de sus intereses.

En vista de todo lo anterior, el paralelograma constituido por la dirección y magnitud de los planes gubernamentales, la dirección y magnitud de las acciones concretas reales del capital y la dirección y magnitud de las presiones de la maquinaria corporativa del capital, se está resolviendo ampliamente en favor de la dirección señalada por el capital. La única fuerza que aparece como capaz de hacer que la resultante cambie de dirección, es la lucha independiente, revolucionaria y combativa de los trabajadores, subempleados y des-

ocupados del campo y las ciudades. Es precisamente en este contexto que debe percibirse la Reforma Política, auspiciada por el aparato burocrático del Estado mexicano. Éste es, a fin de cuentas, el reto a que se están enfrentando las organizaciones revolucionarias en nuestro país. El camino, sin duda alguna, será tortuoso.

15 de septiembre de 1977